

Crónica de la semana

ELECCIONES GENERALES

El presidente Suárez está firmemente decidido a convocar elecciones generales, simultáneas a las municipales, una vez promulgada la Constitución. Esa es, al menos, la impresión coincidente de cuantos miembros del Gobierno han conversado previamente, con él desde que hace semana y media pusiera término a sus breves vacaciones de verano. El único requisito, imprescindible para que su decisión se hiciera efectiva, sería la firma previa de unos nuevos Acuerdos económicos entre los Sindicatos y las organizaciones empresariales que, con el aval de los partidos políticos y del propio Gobierno, permitieran al país emprender la senda de la recuperación económica.

De acuerdo con lo observado por sus colaboradores, el presidente ha reanudado la actividad política completamente recuperado del profundo cansancio que hace un mes le tenía, prácticamente, atenuado. Sus jornadas de reposo y reflexión en alta mar —quienes le acompañaron a Roma a los funerales de Pablo VI, ya pudieron comprobarlo— han tenido un notable efecto sedante que ha permitido aflorar de nuevo a la superficie cualidades tan estimables en un político como la audacia, la generosidad y el sentido del riesgo, las cuales, sin duda, han contribuido a conformar su línea de decisión.

A pesar de que su más implacables críticos se empeñen en no reconocerle capacidad de rectificación alguna, Adolfo Suárez tenía ya muy claro desde hace meses el carácter fronterizo del referéndum constitucional. En diversas ocasiones —de forma singular y expresa en el Pleno del Congreso de primeros de abril— el presidente ha venido manifestando que la «especial manera de gobernar» impuesta por las necesidades del proceso constituyente, prescribiría tan pronto como nuestro texto fundamental quedase popularmente revalidado. En contra de lo que se pueda pensar, Adolfo Suárez es el primero que desea librarse —a menos en sus aspectos más obsesivos y cotidianos— de esa incómoda mordaza programática que hemos bautizado como el «consenso».

Su predisposición a la convocatoria de elecciones generales —compartida por los nombres con mayor peso específico dentro de su Gobierno y acogida con pánico por un buen puñado de diputados centristas, justificadamente temerosos de perder sus inmerecidos escaños— implica el comienzo del reencuentro del presidente con su electorado y, sobre todo, con su verdadera dimensión política. La de un hombre que, a base de esporádicos, pero poderosos golpes de intuición, está consiguiendo superar la inconveniencia de unos hábitos totalmente inadecuados para el ejercicio del Poder en una democracia pluralista.

□ ¿QUE CAMBIARIAN UNAS NUEVAS LEGISLATIVAS?

En el fragor de la polémica, que sin duda arreciará en los próximos días, entre parti-

darios y enemigos de la celebración de nuevas elecciones legislativas a comienzos del año que viene, unos y otros deberán convenir en que esa es la salida natural de un tránsito que la gran mayoría e las fuerzas políticas han deseado ver rematado el modo y manera de todo proceso constituyente. Se trata de algo tan evidente que los detractores de la probable iniciativa gubernamental deberán buscar caminos laterales y tortuosos para hacer valer su posición. El más habitual de todos ellos pasará, sin duda, por la suposición de que los resultados de estos comicios no harían sino repetir, casi con exactitud matemática, los de los celebrados el 15 de junio de 1977.

Pues bien, aferrarse a tal hipótesis —carente por lo demás de excesivo rigor analítico— y hacer de ella una aguerda fortaleza no indica, sino un total desconocimiento del verdadero sentido de los procesos electorales en los países libres. Una elección es algo más que un punto de referencia encajado en un paréntesis del tamaño de las unas oficialmente homologadas y valedero



durante equis años. La gran virtualidad de la campaña no radica tanto en el reparto resultante de los escaños en juego como en la cimentación de sólidos Acuerdos de Gobierno a partir del contraste y la complementariedad de los distintos programas en danza.

En estos momentos U. C. D. no puede formar un ejecutivo respaldado en su gobernar por una mayoría parlamentaria estable. Tanto el Pacto con Alianza Popular como el Pacto con el P. S. O. E., resultan obviamente inviables. Incluso el Acuerdo con la Minoría Catalana, que apenas si resolvería nada, aparece erizado de más problemas que ventajas. ¿Qué cambiaría entonces en el caso de que se convocaran elecciones generales para el mes de febrero? Si, tal y como estoy convencido de que ocurre, este país va asimilando el estilo de convivencia en libertad y las reglas del juego de la democracia, entre la situación actual y la Constitución del Gobierno postelectoral mediaría, sobre todo, una campaña completamente diferente al aparatoso espectáculo de luz y sonido, al refrescante «happening» que, con alborozo sin par, pero completamente aturdidos, vivimos hace quince meses.

□ EL HOMBRE DE LA CALLE SE HA CANSADO YA DE TANTA MÚSICA

Incluso aquellos partidos más frecuentes y mercedamente tachados de irresponsables se dan cuenta de que el hombre de la calle se ha cansado ya de tanta música y no desea, sino respuestas de cuchillo y tenedor para los problemas que de forma tangible inciden en su vida. A nadie le bastará entonces con recitar lindes a la sombra del rostro de su líder. Los ciudadanos exigirán soluciones y los candidatos deberán bajar al ruedo y mojarse con propuestas alternativas ante la guerra de la patata, la problemática pesquera o el conflicto de la Seguridad Social.

Será en este contexto, que la Prensa tiene la responsabilidad de propiciar, en el que quedará patente que una sociedad compleja, pero asentada, como lo es la nuestra, no digiere, sino las respuestas razonables. Y las respuestas razonables son, hoy por hoy, habas contadas dentro de un abanico de posibilidades no demasiado amplio. Las diferencias entre los partidos quedarán pues paulatinamente recortadas, no por procedimientos artificiales y espúreos, sino por el peso inapelable de la realidad. A partir del balance del escrutinio serán posibles entonces los Pactos entre los afines. Habrá llegado la hora de ese gran Gobierno «constitucional, fuerte, democrático y con autoridad» al que Felipe González hizo anteayer referencia en la Escuela de Verano del Partido Socialista Obrero Español.

La firmeza con que el líder socialista pidió la convocatoria de elecciones generales no es sino la traducción adecuada de los Acuerdos adoptados hace un par de meses por el Comité Federal del partido. Muy diversos observadores coincidimos entonces en esta-

SI FELIPE GONZALEZ NO PROPICIA EL PACTO ECONOMICO EMPRESARIOS-CENTRALES, SUAREZ NO TENDRA MAS REMEDIO QUE ARROJARSE EN BRAZOS DE CARRILLO

lar que la verdadera preocupación de la Ejecutiva del P. S. O. E. no era tanto adelantar las legislativas como retrasar su congreso que de celebrarse en diciembre serviría para precipitar con virulencia el debate interno sobre el marxismo. A partir de esta premisa, las opiniones ya son para todos los gustos a la hora de valorar la sinceridad de los socialistas urgiendo a la celebración de nuevos comicios.

LA UNICA CONDICION DEL PRESIDENTE SUAREZ

Felipe González va a tener, muy pronto, la oportunidad de demostrar si de verdad quiere elecciones generales o no. En sus manos va a estar, de hecho, la llave de la decisión pues, por paradójico que parezca, para librarse del consenso va a ser preciso recurrir a él por última vez. El Gobierno a lo que no está dispuesto es a abrir en octubre un periodo electoral de seis meses durante el cual el país se vaya al desastre por la imposibilidad de aplicar política económica alguna, mientras los partidos se dedican a jugar al pím-pam-pum con el señor Suárez y su U. C. D.

Esa es la única condición que va a poner el presidente y que esta misma semana Fernando Abril se va a encargar de transmitir a su buen amigo Alfonso Guerra: ¿Queréis elecciones generales? Nosotros también, siempre y cuando los Pactos de la Moncloa sean sustituidos a su vencimiento por un nuevo mecanismo que asegure la estabilidad social y la continuidad en la recuperación económica. No es preciso que todos los partidos con representación parlamentaria se sienten de nuevo a negociar —cosa que el Partido Socialista Obrero Español ya ha anunciado que no está dispuesto a hacer—, tal y como ocurrió el año pasado. Los interlocutores de este nuevo pacto deben ser, fundamentalmente, la patronal y los sindicatos. Pensar que estos últimos van a actuar de espaldas a los intereses de los partidos sería, sin embargo, el sueño de una noche de verano, y aquí es donde el Partido Socialista Obrero Español entra en juego.

Lo ideal sería que el Gobierno pudiera mantenerse al margen de la negociación y que fueran el señor Ferrer Salat, el señor Redondo y el señor Camacho los que le sirvieran en bandeja el acuerdo ya perfilado. Pero eso sería, simple y llanamente, un pacto social, y las centrales marxistas todavía no parecen preparadas para pasar por ese arroyo. Será, por lo tanto, inevitable que tan pronto se sienten los interlocutores a la mesa aparezcan temas que trasciendan el ámbito de las magnitudes económicas. En ese momento el Gobierno deberá tomar asiento y el diálogo será ya a tres bandas. De hecho, las opiniones están divididas en el seno del Gabinete: mientras hay ministros que piensan que esa debe ser la distribución de la mesa desde el principio, otros creen que es bueno dejarle a Carlos Ferrer librar un primer asalto en solitario con las centrales.

LOS PELIGROS DE UN COMPROMISO HISTORICO A LA ESPAÑOLA

Al margen de estos matices está claro que resulta imprescindible poner en marcha un mecanismo similar al descrito. Es comprensible que a los socialistas les inquiete el hipotético éxito de la operación. Sobre todo a la vista de las cifras y los objetivos manejados últimamente por los responsables del equipo económico del Gobierno: si después de frenar la inflación Unión de Centro Democrático lograra re-

ducir el paro y devolver la confianza al empresario mediante un plan de relanzamiento industrial, su momento electoral podría ser temible. Triste alternativa de poder, sin embargo, la que no sea capaz de presentar argumentos convincentes en un marco de bienestar general y sólo trate de medrar en el deterioro y en el caos!

En el caso de que el P. S. O. E. no propiciara el acuerdo con las centrales —si lo hacen, los comunistas no tendrán otro remedio que secundarle en aras de mantener su credibilidad como partido responsable—, el Gobierno quedaría atado de pies y manos. Suárez no tendría entonces más opción que echarse en brazos de fray Carrillo, que desde hace tiempo le espera en la antecámara con su Plan de Saneamiento a tres años vista. Muchas de las personas que lo rodean se sentirían aliviadas y el propio presidente terminaría moviéndose con comodidad por los entresijos de este compromiso histórico a la española. Pero la democracia parlamentaria quedaría definitivamente conculcada y las avenidas del futuro aparecerían rematadas en su horizonte por los fantasmas de los totalitarismos de ambos signos.

Las próximas semanas van a ser extremadamente delicadas. De lo que ocurra durante las mismas dependerá, en buena medida, el destino de este país a corto y medio plazo. Por eso resulta, especialmente, lamentable que sea precisamente ahora cuando en el seno del Gabinete se lancen ataques insidiosos que afectan a la honorabilidad de uno de sus miembros —titular de una importante cartera económica— de más sólido y merecido prestigio. Ataques que, además de perjudicar a todo el Gobierno, no revelan sino la pequeñez de quien los emite.

SANCHEZ TERAN, CALVO SOTELO Y EL CONFLICTO PESQUERO

En un nivel muy distinto el gran tema de la semana, el conflicto pesquero, ha

puesto de manifiesto ciertas discrepancias entre los Ministerios de Transportes y Relaciones con Europa. Discrepancias más coyunturales que de fondo, fruto en realidad de una desafortunada secuencia de circunstancias. Si un ministro está teniendo la suerte de espaldas desde su acceso al cargo, ese es Sánchez Terán. Accidentes de Metro, huelgas de controladores, catástrofes como la de Los Alfaques... hay quien asegura que lo único que le puede ocurrir ya al ministro de Transportes y Comunicaciones —por prudencia política y experiencia administrativa uno de los hombres más idóneos para cualquier cargo de Gobierno— es que un avión de Iberia se estrelle contra el edificio de la Telefónica. En esta ocasión la mala fortuna quiso que el endurecimiento de la posición irlandesa llegara durante su estancia en Paraguay.

Aunque Sánchez Terán haya cumplido con su obligación cubriendo las espaldas de su Subsecretaria, Victor Moro, estoy seguro de que si él hubiera estado en Madrid la retirada de nuestra flota de las aguas comunitarias no se hubiera producido, o al menos no con la contundencia de comienzos de semana. ¿Qué es lo que motivó esta decisión, que tan atónitos dejó a los escasos funcionarios de la C. E. E. que permanecen en Bruselas en agosto y que la vuelta de los armadores al «Gran sol» ha demostrado equivocada? Una buena teoría es la que la enlaza con la visita a España del ministro irlandés de Pesca a comienzos de julio. Sus promesas de permisividad fueron, al parecer, interpretadas de forma excesivamente laxa por la Administración y transmitidas oficialmente a los armadores —las malas lenguas dicen que de forma preferente a los gallegos—, quienes en cuestión de días convirtieron las aguas irlandesas en una especie de pista de autos de choque. No es de extrañar que cierto complejo de culpabilidad pesara sobre las autoridades españolas que dieron la orden de retirada.

Tal vez pueda criticarse a Leopoldo Calvo-Sotelo por haber aireado en «La libre Belgique» unos trapos sucios que más valía lavar en casa. Al expresar su disconformidad con la Subsecretaria de Pesca no hizo, sin embargo, sino cumplir con su obligación y claramente rendir un servicio a la opinión pública, que compensaba a desahogar por el peligroso tobogán de un chauvinismo fuera de lugar. Ciertamente los países comunitarios pueden y deben ser más generosos con España, sobre todo en cuanto al número de licencias, y que quizá será preciso endurecer nuestra posición negociadora. Ahora bien, de eso a poner el grito en el cielo, afirmando que Europa no nos ha querido ni nos querrá nunca —porque somos mejores que ellos, claro—, y pidiendo inmediatas represalias, media un abismo. Sobre todo cuando, como bien recordó el ministro de Relaciones con Europa, la única razón por la que no hemos sido pura y simplemente expulsados de las aguas de la Comunidad —tal y como les ha ocurrido a muchos pescadores tan tradicionales como nosotros en esos caladeros— es nuestra condición de país candidato a la integración.

Afortunadamente, los barcos han vuelto a la mar, pues a ella pertenecen. Lo que importa ahora es tratar de acelerar al máximo los trámites para la firma en Bruselas del famoso Acuerdo-marco que sustituya unas relaciones basadas en conceptos tan ambiguos como la prudencia y la tolerancia por una situación de seguridad jurídica plena. Nuestros armadores, probablemente, se verán obligados a disminuir el volumen de capturas y algunos barcos —no más del 20 por 100 del total— tal vez queden fuera de combate. Pero a cambio cada empresa pesquera podrá trazar sus propias líneas de rentabilidad y reconversión sin tener que contar con incómodos y gravosos sobresaltos. Así debe ser. Tampoco en el océano puede imperar más ley que la fuerza del derecho —Pedro J. RAMÍREZ.